La universidad que dejo - La Vanguardia - 25/06/2015

Borja de Riquer

La universidad que dejo

Este próximo verano me jubilo, o mejor dicho, me jubilan forzosamente por haber llegado a la edad reglamentaría. He estado 45 cursos dando clases siempre en el mismo centro, la facultad de Filosofía y Letras de la Universitat Autònoma, y eso me ha permitido ser un testigo presencial de las grandes transformaciones que han experimentado los estudios superiores en Catalunya. Hace unos días, en un acto de despedida a los profesores que nos jubilábamos que organizó nuestro decanato, y que todos agradecimos muy sinceramente, tuve la oportunidad de reflexionar en público sobre las diferencias entre la universidad en que entré, en octubre de 1969, y la que ahora dejo. En estas cuatro décadas largas he presenciado un cambio radical en todos los aspectos de la vida universitaria. Con el establecimiento de la democracia, finalmente los poderes públicos españoles y catalanes arbitraron una política que ya podía calificarse de universitaria y se construyó un modelo basado en la autonomía, la cientificidad, la catalanidad y la consideración de la institución como un servicio público, que ha dado buenos resultados durante unas décadas. Hacia el año 2000 muchos considerábamos con orgullo que la universidad catalana estaba en situación homologable a la de los principales países europeos, y eso no era sólo una percepción nuestra, sino que también lo sostenían muchos colegas forasteros y nuestros alumnos erasmus.

IGNOT

Es evidente que hoy este modelo de universidad se tiene que revisar a fondo porque se han cometido errores y, en muchos aspectos, ya no se está a la altura de las necesidades de la sociedad catalana. Ahora bien, lo que no se puede hacer son actuaciones radicales en aspectos fundamentales, como la política de profesorado, sin explicitar, debatir y consensuar hacia qué universidad tenemos que ir. Tengo la sensación de que, con la excusa de la crisis económica, no solamente se han reducido notablemente todas las partidas económicas, sino también se ha aprovechado la coyuntura para proceder a una reestructuración profunda de la institución sin decirlo claramente, ni discutirlo en los órganos de representación. Somos muchos los que pensamos que se están tomando algunas directrices que presuponen una selección de los estudios y del profesorado, discriminando unos e incentivando otros, y que eso implicará también una merma de la autonomía universitaria, introduciendo criterios de mayor centralización de su gestión y de clara jerarquización. Hoy la vida universitaria tiende, como nunca, a una burocratización tan excesiva como estéril y a ponderar sólo la excelencia científica que, con los recortes recientes, sólo puede practicar una minoría. La actual política universitaria, en la práctica, muestra un notable menosprecio por la calidad de la docencia, dado que esta no forma parte de los criterios utilizados en los rankings de evaluación que constantemente se publican.

No puede haber una buena universidad si no se defiende seriamente la calidad docente ni si buena parte del profesorado se siente maltratado. Sólo tendremos una docencia de auténtica excelencia si los profesores están bien considerados, son suficientes, están bien pagados y tienen perspectivas de un futuro profesional digno. La política de profesorado de la Generalitat de los últimos ocho años está frustrando profesionalmente a buena parte de los docentes universitarios, tanto a los más veteranos como a los más jóvenes. La causa es bien clara: la total paralización de la vía funcionarial y el no desarrollo de una vía de contratación laboral seria, eficiente, suficiente y consensuada está impidiendo la estabilidad y la promoción del profesorado más veterano. Hoy son centenares los profesores universitarios catalanes habilitados y/o acreditados como catedráticos, titulares, agregados o lectores por las agencias evaluadoras españolas y catalanas que no pueden acceder en estas plazas porque no se convocan. Hay gente que hace más de seis años que está esperando promocionarse o estabilizarse, sin que nadie le diga ni cuándo ni cómo lo podrá hacer. Además, se está creando un muy amplio colectivo de profesorado eventual, inestable y muy mal pagado –400 euros al mes– que cubre gran parte de la docencia dejada por los jubilados, la mayoría de estos funcionarios, es decir, los mejor remunerados. Volvemos a los tiempos de los PNN, al predominio de la mano de obra barata, poco valorada y despedible. Y a todo eso hay que añadir que los alumnos más brillantes y los mejor preparados de las últimas promociones encuentran enormes dificultades para acceder a las pocas becas que se ofrecen, tienen casi prohibida la entrada en la universidad como docentes y se ven forzados a irse al extranjero. Estamos perdiendo un importantísimo capital humano y eso repercute negativamente en los grupos y líneas de investigación que no pueden dinamizarse con la entrada de investigadores jóvenes. No hay peor política de profesorado que no tener y dejar que las cosas se deterioren. Los incentivos y el reconocimiento al trabajo bien hecho han desaparecido y, con ellos, la autoestima.

Lamento el tono crítico de este artículo, pero no puedo despedirme de mi querida universidad sin lanzar este grito de alarma. Veo con preocupación su futuro porque me temo que este proceso de deterioro de la condición del profesorado repercutirá negativamente en la calidad de la docencia y de la investigación, estrechamente ligadas y núcleos centrales de la tarea de esta institución. Con esta suicida política universitaria nunca podremos llegar a la excelencia que todos deseamos.●